interprofesional antes del 31 de marzo inmediato anterior al comienzo de la campaña de comercialización para la Zona Sur, o del 30 de junio siguiente, para las restantes zonas, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación establecerá las normas que procedan.

Al no haberse alcanzado en la fecha indicada, 31 de marzo de 1985, el acuerdo interprofesional previsto para la campaña de comercialización de la Zona Sur, procede en consecuencia establecer las normas que lo sustituyan.

En su virtud, este Ministerio ha tenido a bien disponer:

Primero.-De no retirar la pulpa fresca, el cultivador de remolacha de la Zona Sur, podrá ejercer cualquiera de las alternativas siguientes, o combinación de las mismas por toneladas de remolacha contratada y entregada en fábrica azucarera, siempre que ésta, en el caso del secado, prensado o peletizado, disponga de las instalaciones necesarias para su producción.

- a) Percibir en metálico 289,40 pesetas.
- b) Retirar, como contravalor equivalente y sin pago alguno a la fábrica azucarera, 155 kilogramos de pulpa prensada con un contenido del 23 por 100 de materia seca.
- c) Retirar, como contravalor equivalente y sin pago alguno a la fábrica azucarera, 15,4 kilogramos de pulpa desecada o peletizada, melazas o no, según lo solicite el agricultor, con un contenido del 90 por 100 de materia seca.
- d) Retirar 204 kilogramos de pulpa prensada con un contenido del 23 por 100 de materia seca, abonando a la fábrica azucarera la cantidad de 92 pesetas por coste de prensado.
- e) Retirar 52,2 kilogramos de pulpa desecada o peletizada, melazadas o no, según lo solicite el agricultor, con un contenido del 90 por 100 de materia seca, abonando a la fábrica azucarera la cantidad de 693 pesetas de coste de desecación.

Segundo.-La pulpa desecada o prensada a que se refiere el punto anterior se entiende mercancía desnuda, en posición muelle fábrica azucarera, y sin el Impuesto General de Tráfico de Empresas.

Tercero.-Los contenidos de materia seca expresados en el punto primero, admitirán una tolerancia de un punto en más o menos para la pulpa prensada y de tres puntos en más o menos, para la pulpa desecada o peletizada.

13169 *RESOLUCION de 20 de mayo de 1985, del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), por la que se dispone la publicación del Convenio entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa.*

Suscrito el 14 de mayo de 1985, el Convenio entre la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario y la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», para la coordinación y colaboración de ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa.

Esta Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Autonómica sobre Acuerdos y Convenios de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas, acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto del Convenio que figura a continuación.

Madrid, 20 de mayo de 1985.-El Presidente, Francisco Botella Botella.

CONVENIO ENTRE LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS, EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO Y LA «EMPRESA NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA, SOCIEDAD ANONIMA», PARA LA COORDINACION Y COLABORACION DE AMBAS ADMINISTRACIONES Y LA EJECUCION DE OBRAS POR LA EMPRESA

En Madrid a 14 de mayor de 1985, se reúnen:

El excelentísimo señor don Jesús Arango Fernández, Consejero de Agricultura y Pesca en nombre de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias.

El ilustrísimo señor don Francisco Botella Botella, Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, en representación de dicho Organismo.

En los casos en que el contenido de materia seca de la pulpa entregada supere o no alcance los límites de tolerancia indicados, se practicará una compensación en el sentido que proceda, sobre la cantidad entregada, de 4,35 por 100 para la pulpa prensada, y de 1,1 por 100, para la pulpa desecada o peletizada, por cada unidad porcentual o fracción que se separe de los porcentajes tipo del 23 por 100 y 90 por 100, respectivamente.

Cuarto.-Para optar por la retirada total o parcial de las pulpas, el cultivador deberá concretar las modalidades y cantidades correspondientes al efectuar la primera entrega de remolacha si antes no se hubiera pactado dicha opción.

Quinto.-A partir del comienzo de la campaña, las industrias confeccionarán periódicamente una relación de las cantidades de pulpa que, de acuerdo con las modalidades elegidas, corresponda retirar a cada cultivador, que se expondrá en el tablón de anuncios de la fábrica, con entrega simultánea de la copia a la Comisión de Recepción u otro procedimiento similar.

A partir de esta publicación en el tablón de anuncios, el cultivador deberá realizar necesariamente la retirada en un plazo máximo de veinte días.

Sexto.-La pulpa no retirada en el plazo señalado se considerará renunciada por el cultivador y quedará en poder de la fábrica, percibiendo aquél el contravalor en metálico de la alternativa a) del punto primero, con una deducción del 25 por 100.

En el caso de que en cualquiera de las fechas señaladas al cultivador para retirar la pulpa, ésta no estuviese disponible, la fábrica indemnizará al cultivador de los gastos de transporte del vehículo que regrese sin carga.

Séptimo.-La liquidación económica correspondiente a la pulpa se efectuará con el pago de la remolacha que corresponda a la última liquidación.

Octavo.-Esta Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I.
Madrid, 2 de julio de 1985.

ROMERO HERRERA

Ilmo. Sr. Director general de Industrias Agrarias y Alimentarias.

El ilustrísimo señor don Alberto Campanero García, Presidente de la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), en representación de la misma, cuyo Consejo de Administración le ha autorizado expresamente para la firma de este Convenio.

Consideran conveniente, antes de determinar las cláusulas que han de regir este Convenio, hacer constar los siguientes antecedentes:

En el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias sobre trasposos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias en materia de reforma y desarrollo agrario, aprobado por Real Decreto 641/1985, de 2 de abril, se prevé tanto la coordinación de las actuaciones concretas que así lo requieran para el ejercicio de funciones y competencias concurrentes como la colaboración entre ambas Administraciones en general, y en particular lo previsto en el apartado D)7.6 del mencionado Acuerdo, y se contienen asimismo determinadas normas y directrices en relación con la ejecución de obras por la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), sin perjuicio de lo que puede establecerse en el futuro sobre el régimen de las Empresas estatales.

Resulta conveniente fijar el marco de coordinación y colaboración entre la Consejería de Agricultura y Pesca y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), principales órganos de actuación en la materia y determinar los sistemas más adecuados para llevar a cabo las acciones y apoyos concretos que en cada caso resulten procedentes, así como complementar las normas que se refieren a la ejecución de obras por TRAGSA regulando extremos específicos de inmediata aplicación para el buen funcionamiento de los servicios tales como la determinación de las obras de ejecución obligatoria o de otro carácter, procedimiento a seguir para fijar el coste de las mismas y su financiación, actuaciones en situaciones de emergencia y asistencia técnica.

En su virtud, la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, el IRYDA y TRAGSA han decidido formalizar este Convenio con sujeción a las siguientes

CLAUSULAS

Coordinación de actuaciones concurrentes y colaboración entre ambas Administraciones

Cláusula primera.—Para la adecuada coordinación de las actuaciones en las que hayan de ejercerse funciones y competencias concurrentes, el IRYDA y la Consejería mantendrán un contacto permanente y celebrarán las reuniones periódicas que se requieran a fin de estudiar las actuaciones de este tipo, programar su ejecución y efectuar su seguimiento.

Cláusula segunda.—Tanto para estas actuaciones como para cualquier otra de reforma y desarrollo agrario, el IRYDA pone sus medios y capacidad tecnológica a disposición de la Consejería en la medida en la que lo permitan sus posibilidades.

De acuerdo con ello, la Consejería podrá interesar del Instituto la colaboración de éste en actividades como:

La realización de cursos de formación y seminarios.

La realización de estudios en materia de investigación de aguas subterráneas, regadíos con ahorro de agua, empleo de aguas residuales, etcétera.

El tratamiento informático para la elaboración de documentos en materia de concentración parcelaria, obras, auxilios, etcétera.

Los servicios cartográficos para la confección de planos, títulos de propiedad, etcétera.

La elaboración de proyectos tipo.

La asistencia técnica para la redacción de planes, proyectos y dirección de obras, en particular para las que requieran ingeniería asistida por ordenador o especialidades para las que la Consejería tenga insuficiencia de medios.

Cláusula tercera.—La Consejería pone por su parte a disposición del IRYDA en la medida que lo permitan sus posibilidades los estudios y datos económicos, agronómicos o sociológicos de que disponga, así como el apoyo técnico y los medios necesarios para la realización de los trabajos que haya de realizar el Instituto en el ejercicio de sus propias competencias.

Cláusula cuarta.—El IRYDA continuará prestando la máxima atención a la investigación y desarrollo tecnológico, tanto en el ámbito nacional como en el internacional, para contar permanentemente con una tecnología punta y pondrá a disposición de la Comunidad Autónoma cuantos avances e innovaciones se produzcan. Por su parte, la Consejería aportará sus innovaciones propias cuya difusión pueda ser de interés.

Cláusula quinta.—La Consejería y el Instituto estudiarán, de acuerdo con la legislación vigente, las posibilidades de financiación conjunta para la realización de cualquier actuación concreta que pueda ser de interés para una u otra de las partes.

Anualmente se concretará la realización en común de los programas de infraestructura en zonas de montaña establecida en el apartado D) 7.6 del Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias así como de las restantes acciones a que haya lugar con arreglo a lo previsto en el párrafo anterior.

Cláusula sexta.—El IRYDA remitirá a la Consejería toda la documentación que publique en relación con cualquier materia de reforma y desarrollo agrario, bien se refiera al ámbito de la Comunidad Autónoma o a nivel nacional, por cuanto pueda resultar de interés para la misma.

Cláusula séptima.—La Consejería proporcionará al Instituto sus propias publicaciones sobre la materia, así como los datos básicos que unidos a los de las restantes Comunidades Autónomas y a las de la Administración del Estado permitan la elaboración de la Memoria que redacta periódicamente el Instituto sobre actividades y resultados en reforma y desarrollo agrario a nivel nacional.

Cláusula octava.—Para la mejor efectividad de la coordinación de las actuaciones de ambas Administraciones y la colaboración prevista en las cláusulas anteriores, el Jefe provincial del IRYDA y el Director regional de Agricultura del Principado de Asturias mantendrán reuniones periódicas al respecto, en las que se procurará conocer las necesidades de ambas partes con la suficiente antelación para permitir la planificación de los trabajos correspondientes de la Consejería y que el IRYDA pueda hacer la oportuna asignación de medios teniendo en cuenta también las necesidades del resto de las Comunidades Autónomas.

Ejecución de obras por TRAGSA

Cláusula novena.—De conformidad con lo acordado por la Comisión Mixta de Transferencias, es de aplicación para la Comunidad Autónoma lo establecido para el IRYDA en el Real Decreto 1773/1977, de 11 de julio, y considerándose, por tanto, las obras que a título obligatorio realice la Empresa en el territorio de la Comunidad Autónoma, por orden de ésta, como ejecutadas directamente por la Administración de la Comunidad Autónoma con sus propios medios.

Cláusula décima.—TRAGSA estará obligada a realizar, de

acuerdo con las condiciones de este Convenio, previo encargo de la Consejería y dentro del territorio de la Comunidad, obras de nivelación, movimiento de tierras, caminos rurales, drenajes, sondeos, captación de aguas subterráneas, trabajos de desfondeos, roturaciones, silvícolas, de concentración parcelaria y, en general, cualesquiera obras de carácter agrario o de mejora del medio rural.

La Consejería encargará normalmente a TRAGSA las obras mencionadas anteriormente como de ejecución obligatoria para la Empresa, tanto si figuran en Programas conjuntos del IRYDA y de la Comunidad, como si corresponde a programas de inversiones que sean exclusivos de esta última.

La Consejería procurará comunicar a TRAGSA su programación de trabajo con la mayor antelación posible, a fin de que ambas partes organicen conjuntamente el trabajo a realizar por ésta, así como el ritmo de ejecución de las obras de tal modo que el programa se pueda cumplir eficazmente de acuerdo con las necesidades de la Consejería, los recursos económicos de que disponga y lo que aconseje el funcionamiento normal de TRAGSA en cuanto a la utilización de sus medios de producción.

Asimismo serán de ejecución obligatoria aquellas acciones que la Consejería encargue a TRAGSA con carácter de urgencia, a causa de acontecimientos catastróficos o de situaciones que supongan grave peligro socioeconómico.

Cláusula undécima.—Para determinar el coste de las obras y trabajos de ejecución obligatorios se aplicarán las mismas tarifas, plazos, fórmulas polinómicas para su actualización y sistema para cifrar el presupuesto total de ejecución material de cada obra actualmente para el IRYDA y que obran en poder de la Consejería.

Las valoraciones mediante estas tarifas de la obra ejecutada serán consideradas como los justificantes a que se refiere el párrafo primero del artículo 194 del Reglamento General de Contratos del Estado.

Cuando se trate de obras de mera conservación no susceptibles, por sus características, de la redacción de un proyecto, o bien de obra comprendida en el último párrafo de la cláusula décima, o también de aquellas cuya naturaleza haga imposible la fijación previa de un precio cierto, o de presupuesto por unidades de trabajo, así como cuando circunstancias imprevisibles, que se manifiesten en el curso de la obra, haga totalmente inaplicable las tarifas previamente establecidas, podrá utilizarse el sistema de coste y costas tal como se regula en el artículo 67 del Reglamento General de Contratación del Estado, con derecho de la Empresa a recibir una percepción económica del 5 por 100 de la suma de coste y costas.

Cláusula duodécima.—En situaciones de emergencia, el IRYDA podrá ordenar la utilización con carácter prioritario de todos los recursos materiales y personales de TRAGSA que fueran precisos.

Asimismo en las emergencias declaradas por la Comunidad Autónoma, la Consejería podrá ordenar la directa ejecución de las obras indispensables y urgentes, quedando TRAGSA obligada a utilizar a tal fin los recursos de que habitualmente dispone en el territorio de la Comunidad que fueran precisos.

En uno y otro caso, se tendrán en cuenta las normas que figuran en el artículo 27 de la Ley de Contratos del Estado y los supuestos anteriores se considerarán como de fuerza mayor y quedarán en suspenso todos los plazos que vinculen a la Empresa para la ejecución le encargue a título obligatorio, el 80 por 100 de la obra la Administración Central. Desaparecida la causa se procederá al reajuste de los plazos.

Cláusula decimotercera.—De conformidad con lo previsto en el Real Decreto 1773/1977, de 11 de julio, declarado aplicable a este Convenio en la cláusula novena del mismo, se acuerda que la Comunidad anticipará a la Empresa, a cuenta de las obras cuya ejecución le encargue a título obligatorio, el 80 por 100 de la obra total a ejecutar durante el ejercicio económico, siempre que las disponibilidades de la Comunidad lo permitan.

Cuando el volumen de las obras encargadas a la Empresa, la concentración o dispersión de las mismas en el espacio o en el tiempo, las características específicas de las zonas de actuación, las posibilidades de financiación por parte de la Consejería u otras razones así lo aconsejen, la Consejería y la Empresa podrán acordar la adaptación a tales circunstancias de las tarifas establecidas con carácter nacional, mediante la aplicación de los coeficientes correctores oportunos.

Cláusula decimocuarta.—Con independencia de las obras y trabajos de carácter obligatorio, TRAGSA pone su tecnología a disposición de la Comunidad Autónoma para la elaboración de los estudios, planes proyectos, memorias e informes técnicos, económicos o sociales de carácter agrario que pudieran interesarles.

El coste de esta asistencia técnica en ningún caso será superior al 80 por 100 del que se fija en la «Tarifas de honorarios de Ingenieros en trabajos a particulares», de conformidad con el artículo 6.º de las bases generales de dichas tarifas.

Cláusula decimoquinta.—La participación de la Comunidad Autónoma con el IRYDA en la elaboración periódica de las tarifas prevista en el apartado D.1 del Acuerdo de la Comisión Mixta de

Transferencias y la coordinación de las relaciones entre las partes en lo relativo a las obras a ejecutar por TRAGSA se realizará a través de los órganos que a tal efecto se constituyan con participación de todas las Comunidades Autónomas.

Mientras tanto, se constituirá un Grupo de Trabajo formado por igual número de representantes del IRYDA y de la Consejería, en el que también estará representada la Empresa, que realizará los estudios y propuestas para su aprobación de:

La actualización de precios de las Tarifas vigentes.

La modificación de la fórmula polinómica para la actualización de precios y creación de otras nuevas.

Cualquier modificación de la Tarifas o de los elementos que las integran.

La selección de común acuerdo de obras prevista en el mismo apartado D.1 antes citado, en el supuesto de que hubieran de ser encomendadas obras a TRAGSA tanto por la Consejería como por el Instituto.

Cualquier otro tema relacionado con TRAGSA en virtud de este Convenio.

A cuyo efecto dicho grupo podrá recabar de TRAGSA los datos y documentos de la Empresa que se juzguen precisos.

Cláusula decimosexta.—Las modificaciones a que se refiere la cláusula anterior o cualquier otra que afecte al régimen jurídico actualmente vigente serán aplicables a las obras de ejecución obligatoria que se encarguen a la Empresa, una vez aprobadas por la Administración del Estado, si bien la Comunidad Autónoma podrá no quedar vinculada a nuevos compromisos derivados de tales modificaciones, siempre que así lo manifieste expresamente en el plazo de treinta días desde que le sean formalmente comunicadas por el IRYDA.

Cláusula decimoséptima.—Para la interpretación y aplicación de las cláusulas anteriores se observarán como Derecho Supletorio la Ley y Reglamento de Contratos del Estado, el Pliego de Cláusulas Administrativas generales para la contratación de obras del Estado, aprobado por el Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, y el Convenio que regula las relaciones entre el IRYDA y TRAGSA, una copia del cual obra en poder de la Consejería.

Cláusula decimoctava.—Sin perjuicio de lo que se establezca en el futuro sobre el régimen de las Sociedades estatales, la vigencia de este Convenio será indefinida, si bien cualquiera de las partes podrá denunciarlo poniéndolo en conocimiento de las demás con tres meses de antelación a la fecha en que hubiera de quedar sin efecto. En todo caso habrán de ser finalizadas con arreglo al mismo las actuaciones en curso.

Leído y hallado conforme, lo firman los intervinientes en el lugar y fecha indicados.

Por el Principado de Asturias, el Consejero de Agricultura y Pesca, Jesús Arango Fernández.—Por el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, el Presidente, Francisco Botella Botella.—Por la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), el Presidente, Albergo Campanero García.

13170 *RESOLUCION de 31 de mayo de 1985, del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), por la que se dispone la publicación del Convenio entre el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, la Dirección General de Política Agroalimentaria y Agricultura Asociativa de la Junta de Andalucía y la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», para la coordinación y colaboración entre ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa.*

Suscrito el 30 de mayo de 1985, el Convenio entre el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria, la Dirección General de Política Agroalimentaria y Agricultura Asociativa de la Junta de Andalucía y la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima», para la coordinación y colaboración entre ambas Administraciones y la ejecución de obras por la Empresa.

Esta Presidencia, en virtud de lo dispuesto en el punto cuarto del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para la Política Autonómica sobre Acuerdos y Convenios de la Administración del Estado con las Comunidades Autónomas, acuerda la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del texto del Convenio que figura a continuación.

Madrid, 31 de mayo de 1985.—El Presidente, Francisco Botella Botella.

CONVENIO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE REFORMA Y DESARROLLO AGRARIO, EL INSTITUTO ANDALUZ DE REFORMA AGRARIA, LA DIRECCION GENERAL DE POLITICA AGROALIMENTARIA Y AGRICULTURA ASOCIATIVA DE LA JUNTA DE ANDALUCIA Y LA «EMPRESA NACIONAL DE TRANSFORMACION AGRARIA, SOCIEDAD ANONIMA», PARA LA COORDINACION Y COLABORACION ENTRE AMBAS ADMINISTRACIONES Y LA EJECUCION DE OBRAS POR LA EMPRESA

En Madrid a 30 de mayo de 1985, se reúnen:

El ilustrísimo señor don Francisco Botella Botella, como Presidente del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (en lo sucesivo IRYDA).

El ilustrísimo señor don José María Sumpsi Viña, como Presidente del Instituto Andaluz de Reforma Agraria (en lo sucesivo IARA).

El ilustrísimo señor don Emilio Díaz Berenguer, como titular de la Dirección General de Política Agroalimentaria y Agricultura Asociativa (en lo sucesivo DGPAAA), y

El ilustrísimo señor don Alberto Campanero García, Presidente de la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (en lo sucesivo TRAGSA), en representación de la misma, cuyo Consejo de Administración le ha autorizado expresamente para la firma de este Convenio.

Consideran conveniente, antes de determinar las cláusulas que han de regir este Convenio, hacer constar los siguientes antecedentes:

En el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias de fecha 1 de febrero de 1984 sobre traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de reforma y desarrollo agrario, aprobado por Real Decreto 1129/1984, de 4 de abril, se prevé tanto la coordinación de las actuaciones concretas que así lo requieran en el ejercicio de funciones y competencias concurrentes como la colaboración entre ambas Administraciones en general y se contienen asimismo determinadas normas y directrices en relación con la ejecución de obras por la «Empresa Nacional de Transformación Agraria, Sociedad Anónima» (TRAGSA), señalándose la posibilidad de regular mediante Convenio las relaciones entre la Comunidad Autónoma, el IRYDA y esta Empresa, sin perjuicio de lo que puede establecerse en el futuro sobre el régimen de las Empresas estatales.

Resulta procedente para el mejor funcionamiento de los servicios desarrollar los mecanismos de colaboración y coordinación previstos en dicho Acuerdo por lo que se refiere al IRYDA, al IARA y a la DGPAAA, principales órganos de actuación en la materia, recogiendo los extremos que la experiencia obtenida hasta el momento ha puesto de manifiesto que tienen mayor interés al respecto. Y convenir por otro lado, en lo referente a la ejecución de obras por TRAGSA, extremos tales como la determinación de las obras de ejecución obligatoria o de otro carácter, el procedimiento a seguir para fijar el coste de las mismas y su financiación, las actuaciones en situaciones de emergencia y la asistencia técnica.

En su virtud, las partes intervinientes han decidido formalizar este Convenio con sujeción a las siguientes

CLAUSULAS

Coordinación y colaboración entre ambas Administraciones

Cláusula 1.^a Para llevar a efecto la planificación conjunta de las actuaciones que así lo requieran y en particular la colaboración y coordinación previstas en este Convenio, se crea una Comisión presidida por el ilustrísimo señor Presidente del IRYDA siendo Vicepresidente el ilustrísimo señor Presidente del IARA y el ilustrísimo señor Director general de la DGPAAA, e integrada en total, por igual número de representantes de ambas Administraciones. La propia Comisión determinará sus normas de funcionamiento y la periodicidad de sus reuniones que al menos serán semestrales y deberán permitir el establecimiento con la suficiente antelación de los programas a desarrollar en cada ejercicio.

Cláusula 2.^a Con carácter general, el IRYDA, el IARA y la DGPAAA acuerdan mantener una mutua información y colaborar en los extremos concretos que determinen de común acuerdo referentes a actividades de:

Relación de trabajos en materia de investigación de aguas subterráneas, regadíos con ahorro de agua y empleo de aguas residuales e industrialización agroalimentaria.

Asistencia técnica para la redacción de planes, proyectos y dirección de obras, en particular para las que requieran ingeniería asistida por ordenador o especialidades para las que cualquiera de las partes tenga insuficiencia de medios.

Tratamiento informático para la elaboración de documentos en materia de concentración parcelaria, obras, auxilios, etc., incluida la instalación de un terminal del ordenador del IRYDA para uso